

Visión y revisión del 30 de noviembre de 1952 (notas sobre la dictadura en Venezuela)

Alfredo Angulo Rivas

El establecimiento de la dictadura en Venezuela no fue obra de un plan maestro elaborado y puesto en práctica, limpia y redondamente, por Marcos Pérez Jiménez. Es claro que él había dejado translucir aspiraciones políticas dada su activa participación en dos golpes de Estado. Pero el asunto digno de interés estriba en que Pérez Jiménez trató inicialmente de legitimar su mandato en términos semejantes a los propuestos por el Presidente Carlos Delgado Chalbaud. La hipótesis que vamos a sostener marcha en contravía a la creencia general: Marcos Pérez Jiménez transitó el camino de la dictadura a causa de su inhabilidad para comunicar la verdad del fraude electoral ocurrido el 30 de noviembre de 1952. La suya fue una reacción defensiva tras develarse el complot organizado por Miguel Moreno y otros altos funcionarios del gobierno, quienes secretamente montaron un tinglado de poder con miras a favorecer a Jóvito Villalba y a su partido Unión Republicana Democrática. De manera que es a partir del 2 de diciembre de 1952 cuando, en rigor, se impone el proyecto militar de gobierno. Marcos Pérez Jiménez decide gobernar con las Fuerzas Armadas y en su nombre va a actuar. Este caso muestra como una evolución política bajo el protagonismo de actores militares, existe sin embargo un alto grado de azar, bien por la ocurrencia de eventos inesperados, por la rapidez y la audacia de las opciones seleccionadas o por el talento y la habilidad de algunos individuos específicos.

Paradojas de un proceso electoral

1952 fue un año electoral: muchos grupos políticos crecen de la noche a la mañana por todo el país. Eran agrupaciones independientes en apariencia, siendo en realidad grupos formados por la ingeniería gubernamental. En Venezuela ya era una tradición que individuos oportunistas formaran grupos de ‘independientes’ en apoyo del gobierno que había seguido a una revolución exitosa. El caso es que se trataba de ciudadanos notables en su respectiva localidad, hombres de negocios y profesionales quienes, en su gran mayoría, eran seguidores del gobierno.

Curiosamente, sin embargo, los grupos electorales digitados oficialmente tenían un handicap en su cualidad para atraer votos. Sus candidatos eran elementos conservadores, exitosos y ricos, esto es, ciudadanos sin atractivos de masas. El comité ejecutivo de la organización oficialista en el Distrito Federal mostró el apoyo de los más altos estratos sociales de Caracas a la Junta de Gobierno, así como la red de vínculos que existía entre sus miembros. El ingeniero civil Oscar Rodríguez Gragirena, secretario general del grupo electoral, tenía el cargo de director gerente de los trabajos de construcción de la avenida Bolívar. Margot Boulton, primera mujer presidente del Concejo Municipal del Distrito Federal en 1947, figura como secretaria de organización femenina. En el comité ejecutivo de la organización figuraban apellidos de reputación social. Allí estaba Juan Bernardo Arismendi, rico propietario de bienes raíces cuyo hijo político, Carlos Raúl Villanueva, será el gran maestro de la arquitectura moderna en Venezuela. Encontramos a Pedro Gutiérrez Alfaro, un prestigioso obstetra cuyo hermano era embajador de Venezuela en Río de Janeiro. A Feliciano Pacanins, vicepresidente del Banco de Venezuela y hermano del gobernador del Distrito Federal. A Julio César Morón, compañero de leyes del Presidente Suárez Flamerich. Al rico fabricante Armando Capriles, quien recolectaba fondos donados por los hombres de negocios para la organización oficial. Al abogado Manuel José Arreaza, esposo de una hija del general José María García, uno de los ‘sesenta andinos’ que acompañaron a Cipriano Castro en su alzamiento militar al finalizar el siglo XIX, quien había amasado una fortuna estimada en 20

millones de bolívares bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez (NARA, 731.00/10-351). Eran, pues, hombres y mujeres de los más altos estratos sociales capitalinos de Venezuela.

No dejaba de ser paradójico el momento político: un gobierno de facto que deseaba ganar una consulta sin maquinaria electoral, provisto además de un personal político sin arraigo de masas. Y un partido político, Acción Democrática en este caso, que como toda formación partidaria es una máquina de ganar elecciones, dispuesta a sabotear la ejecución de la contienda electoral.

La “*espera desesperada*” fue una actitud que cundió la práctica de amplios sectores de la AD clandestina. Sus acciones no sólo rezumaron escasa o ninguna confianza en la venidera consulta electoral, sino que al transitar la vía de la violencia política al tiempo de estar en situación ilegal, difícilmente podía reconstituirse en un polo electoral que sumara nuevas adhesiones. Desde los altos círculos del gobierno nacional hubo, además, la intención deliberada de estimular la división interna de AD. Prueba de ello había sido la decisión del 19 de abril de 1949, ocasión en la que fueron puestos en libertad varios dirigentes de AD nativos del andino estado Táchira. El secretario de la Junta Miguel Moreno, al ordenar la libertad de Leonardo Ruiz Pineda, Luis Troconis Guerrero, Carlos Andrés Pérez, Cesar Morales Carrero y Luis Hurtado Higuera, apuntó a “...*crear un fuerte deterioro en el seno de la organización donde aquellos estaban afiliados*” (Acuña, 1990:156). Desde la fecha de su liberación en abril de 1949, Leonardo Ruiz Pineda pasa a ocupar la secretaría general de AD. Y en razón a la soterrada protección otorgada por Moreno, él será el único dirigente que pudo mantener la continuidad de 42 meses ininterrumpidos al frente de la dirección nacional clandestina de este partido.

Las paradojas, en fin, no podían ser más evidentes: un gobierno que habiendo nacido por vía de un golpe de Estado, buscaba legitimarse electoralmente. Entretanto, Acción Democrática, cuyo mandato había sido desconocido sin resistencias manifiestas pese al masivo espaldarazo popular recibido en tres comicios a lo largo de los años 1946, 1947 y 1948, cargaba los dados a favor de la rebelión militar y la acción directa. AD no se percató de que la prosperidad

económica derivada de la expansión del ingreso petrolero, creó una base material estable que permitió a la Junta gobernante una capacidad para acomodar intereses de distinta naturaleza social. El 15 de diciembre de 1950 el Boletín número 4 del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD, al evaluar la situación económica y administrativa del país mostraba una perspectiva equivocada de los hechos. Así decía: *“En las últimas semanas el malestar del comercio, de la industria, de las clases productoras, se ha acentuado notablemente como reflejo de la caótica situación política y del entramamiento producido por un estado de sitio que lleva prácticamente más de dos años de duración”* (AHM, B-10; 15/12/1950). El documento del CEN, al tiempo de fijar preferencia por un partido con un menor número de miembros pero activos todos, reconocía una práctica que cobraba fuerza en AD. Era la propuesta de que la actividad organizativa y política diaria debía ser sustituida por una actitud de ‘espera desesperada’ que llevara a este partido por medios extraordinarios a la reconquista del poder.

Muchos de los militantes de AD asumieron una actitud contraria a la política de no-violencia, llegando a transitar el dudoso camino moral del terrorismo. La novela *Se llamaba SN* de José Vicente Abreu deja lugar a pocas dudas respecto a la adopción de una estrategia violenta de recuperación del poder. El relato que el autor hace del 12 de octubre de 1951 está escrito en un estilo transparente que deja lugar a pocas dudas (Abreu, 1964:94). Frente a una política de contornos violentos bien definidos, la reacción gubernamental se hace aún más represiva. El 8 de diciembre de 1951 es reabierto Guasina, un centro penitenciario localizado sobre una isla fangosa de 4 millas en el Delta del Río Orinoco. Allí fueron confinados varios centenares de presos políticos, en medio de condiciones ambientales extremadamente adversas para la vida humana. Aunque clausurada trece meses más tarde (el 20 de diciembre de 1952), Guasina se convertiría en el estigma de un gobierno que ante los ojos de la opinión pública internacional, mostraba una orientación autoritaria al violentar los derechos humanos de la población. Irónicamente un civil con formación jurídica preside el gobierno de Venezuela durante aquel lapso de tiempo: el Dr. Germán Suárez Flamerich.

En suma, la práctica de la violencia no fue una conducta excepcional en AD. Al lanzar los dados por el golpe de Estado, el costo humano para AD fue altísimo porque significó la pérdida de su generación de líderes de relevo, sin descontar que esta formación partidaria adoptó una estructura organizativa cerrada semejante a la de un cuerpo militar en la que el debate interno resulta cancelado. Los frutos de esa opción revirtieron en su contra: el trabajo de masas es abandonado en aras de un voluntarismo heroico pero inútil que terminó por coadyuvar en la tarea de consolidar al régimen que se pretendía derrumbar.

El naufragio del proyecto civil de gobierno

La Junta de Gobierno dio muestras sinceras de querer realizar la consulta electoral porque tenía confianza en que saldría airosa de la confrontación. El 27 de febrero de 1952, con motivo de haber comenzado el lapso del registro de los votantes hombres y mujeres mayores de 21 años previsto por el Estatuto, el ministro de Relaciones Interiores Luis Felipe Llovera Páez dirige una alocución al país cuyo planteamiento central es la defensa de un gobierno de opinión que esté respaldado por los votos de la mayoría: *“La Junta de Gobierno considera que una de las más importantes razones para desear la feliz culminación del proceso electoral consiste en que sólo a un cuerpo deliberante, libremente elegido, representativo genuino de la voluntad popular, puede y debe corresponderle el examen detenido de las cuentas de la Administración”*, asevera el ministro Llovera Páez en clara adhesión al control democrático de la gestión de gobierno (Rivas Rivas, 1977:182). De manera que la prédica democrática oficial permanece, no obstante las restricciones a la oposición abierta de los partidos políticos.

La Junta gobernante echó adelante iniciativas en dirección a garantizar un resultado favorable. Con tal fin establece tres grupos electorales en distintas ciudades de la geografía nacional: el Frente Electoral Independiente (FEI) localizado en Maturín (estado Monagas); la Organización Independiente (OI) con sede en Barquisimeto (estado Lara) y la Unión Nacional (UN), asentada en Maracaibo (estado Zulia). Al mismo tiempo, crea un Comité Nacional Coordinador a fin de

armonizar el trabajo de los tres grupos electorales. En su junta directiva aparecen los nombres del secretario de la Junta Miguel Moreno, del secretario del Presidente de la República el abogado ex comunista Rafael Heredia y del director de política del Ministerio de Relaciones Interiores Ciro Sánchez Pacheco. En el comité coordinador de la agrupación oficial aparece también el nombre de Guillermo Veloz Mancera, otra figura política ligada a la izquierda comunista. Pragmáticamente, los viejos cuadros comunistas habían entrado a palacio haciendo a un lado sus preceptos ideológicos, aunque no por esa renuncia dejaran de accionar políticamente. El sorpresivo resultado de las elecciones del 30 de noviembre de 1952, estará asociado a los hombres que dirigieron el comité nacional coordinador del partido oficial.

Pocos días antes de hacerse efectivo el escrutinio electoral, la ocurrencia de un evento de innegables implicaciones políticas va a enervar la fuerza del proyecto civil de gobierno. La Seguridad Nacional pone al descubierto la conexión secreta entre el secretario de la Junta de Gobierno Miguel Moreno y el secretario general de la AD clandestina Leonardo Ruiz Pineda. En telegrama al Secretario de Estado Dean Acheson, el embajador Fletcher Warren informa el 4 de noviembre de 1952: *“La fuente mencionó que en una ocasión cuando la policía había efectivamente rodeado la casa donde estaba Ruiz Pineda, éste había sido enviado afuera por Moreno. Agregó que Moreno había escondido ocasionalmente en su casa a Ruiz Pineda. La fuente consideraba a Moreno un traidor en todo sentido y auguraba jubilosa la continuación de Pérez Jiménez en el poder”* (NARA 731.00/11-452).

Desde esta perspectiva se comprende mejor por qué Leonardo Ruiz Pineda, en unión a otros políticos de AD nativos del estado Táchira, habían sido liberados en abril de 1949, mientras que otros líderes de esta organización permanecieron en la cárcel. Es de anotar que las respectivas historias personales de Ruiz Pineda y Miguel Moreno evidenciaban dos coincidencias biográficas que dieron base objetiva a la identificación recíproca: ambos habían nacido en la fronteriza población de Rubio y en el año 1916. La cercana relación entre los dos políticos fue cultivada en la década de los años treinta, época en la cual ambos hicieron labor periodística en el semanario *El Esfuerzo*, una hoja

impresa que circulaba en aquella pequeña localidad de los Andes venezolanos. Así lo relató en sus amenos apuntes autobiográficos el malogrado dirigente de AD (Ruiz Pineda, 1977:114).

La muerte del secretario general de AD ocurre el 21 de octubre de 1952, tras producirse un enfrentamiento armado con dos agentes de la Seguridad Nacional. Es verdad que el líder tachirenses era el hombre más buscado en Venezuela. Obviamente, cerca de 1200 días en la oposición clandestina representaban un desafío a la eficiencia gubernamental. En sana lógica sin embargo, resulta impensable que se hubiera ordenado su asesinato. Habiendo sido gobernador del Táchira y luego ministro de Comunicaciones, Ruiz Pineda tenía una proyección nacional que desaconsejaba la aplicación de una medida de tan alto coste político. Su muerte, antes que obra de una delación, fue el resultado de la actitud temeraria del líder. Acción Democrática vivía graves discrepancias internas y en consecuencia mal podía interesarle al gobierno la liquidación física del secretario general de este partido. Eligio Anzola, dirigente nacional de AD y ministro de Relaciones Interiores durante el gobierno de Rómulo Gallegos dio cuenta de la fractura interna que sufría este partido: *“En el exterior y sobre todo entre el presidente Rómulo Betancourt y el Secretario General de AD, Leonardo Ruiz Pineda, había una gran separación, había no solamente separación sino que había grandes discrepancias en la manera de conducir el movimiento. Leonardo prácticamente no tenía comunicación con el presidente Betancourt [...] Yo tengo la impresión de que había aquí un grupo de personas que rodeaban a Leonardo Ruiz Pineda y le había hecho ver la conveniencia de alejar a Rómulo de toda participación del movimiento acciondemocratista, asumiera él completamente la dirección del partido y en el caso muy posible (muchas veces fue así), de que se diera un golpe, asumiera él (Ruiz Pineda) la presidencia de la República”* (Acuña, 1977:477). En un nuevo acto que confirmaba su maestría para la intriga política, Miguel Moreno había estimulado la separación entre ambos líderes de AD.

El caso es que el gobierno aparecía violentando un tácito acuerdo histórico. El funcionario de la embajada americana en Caracas Henry A. Hoyt dejó constancia escrita de esta circunstancia, el 30 de octubre de 1952: *“Fue puntualizado que Ruiz Pineda es un Andino y que a*

pesar de las diferencias en las lealtades políticas de los Andinos en el pasado, ambos lados se habían abstenido de matarse unos a otros. Muchas personas declaran que es la primera ruptura de este pacto” (NARA, 731.00/10-3052). Y a renglón seguido acotaba: *“Entonces, el Gobierno, en lugar de manejar el asunto astutamente, ‘complicó la felonía’ por la pretendida muerte de tres o cuatro personas arrestadas en conexión con las actividades de Ruiz Pineda. Mientras ningún anuncio sobre estas muertes fue hecha, pronto fue un secreto público que varias otras personas habían sido muertas a través de la brutalidad de oficiales de la Seguridad Nacional”* (NARA, 731.00/10-3052). Es de anotar que la muerte de Ruiz Pineda conmovió hasta los más altos niveles del gobierno. De ello dejó constancia escrita Bainbridge C. Davis, funcionario del Departamento de Estado el 12 de noviembre de 1952: *“Una fuente de la embajada que ha sido apoyo de Pérez Jiménez entiende que el 3 de noviembre el presidente de la Junta amenazó con renunciar a menos que fuera tomada una acción para sancionar aquellos responsables por el reciente asesinato”* (NARA, 731.00/11-1252). Pero no solo el Presidente Suarez Flamerich, con su actitud discrepante, entrañó un problema en el gobierno.

La posición del secretario de la Junta de Gobierno y la de su hermano, coronel Félix Román Moreno, jefe encargado del Estado Mayor, no pasaba desapercibida. Un informe de la embajada de los Estados Unidos en Caracas del 30 de octubre de 1952, daba cuenta de la relación: *“El primero es acreditado como el más astuto político entre la jerarquía del Gobierno, y éste es a menudo referido como el segundo hombre más poderoso en Venezuela”* (NARA, 731.00/10-3052). Obviamente, la suma de estas fuerzas daba lugar a rumores sobre las ambiciones políticas de ambos hermanos y sus maniobras a fin de ganar más poder: *“La protección de Miguel Moreno a comunistas como Rafael Heredia, así como de otros repugnantes elementos dentro del Gobierno (sic), ha causado comentarios y es puntualizado como evidencia de que Miguel Moreno está desarrollando su propio grupo de seguidores dentro del Gobierno. Además, Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional, ha admitido a funcionarios de la Embajada que ‘los Morenos están fuera de mi alcance’. Debido a que Estrada es considerado como un hombre escogido por Llovera Pérez y Pérez Jiménez, esto es visto por algunos como prueba según la cual los Morenos están trabajando secretamente contra los miembros de la Junta”* (NARA, 731.00/10-

3052). Y en efecto, la ambición personal de Miguel Moreno entró en oposición a la de Pérez Jiménez. Sin embargo, el secretario de la Junta de Gobierno continua en funciones públicas porque su destitución, a dos semanas de hacerse efectiva la consulta electoral, hubiera significado admitir la crisis interna a la vista de todos.

El 17 de noviembre de 1952, el jefe de la Seguridad Nacional visita la embajada americana en Caracas. Pedro Estrada solicita conversar sobre la situación política del país. Allí declara al embajador Warren lo siguiente: *“Miguel Moreno, Heredia, Pinzón y el resto de los miguelitos están acabados. Ellos continúan en sus oficinas bajo cerrada observación hasta después de las elecciones ... Los miguelitos fueron removidos en el último minuto de las lista oficial de candidatos a la Asamblea Constituyente... El presidente Suárez Flamerich, intentó apoyar a Miguel Moreno en el asunto Ruiz Pineda. Después de las elecciones él probablemente irá a la Embajada de España, su importante utilidad política ha terminado”*, dice Estrada para finalizar la conversación (NARA, 731.00/11-1752). Pero en algo se equivocó el bien informado jefe de la policía secreta: las elecciones no se llevarían a cabo sin problemas.

En resumen, con la muerte de Ruiz Pineda la red de vasos comunicantes entre andinos tachirenses queda rota. El trabajo de espionaje de la Seguridad Nacional detectó cómo Ruiz Pineda gozaba de la protección de Miguel Moreno. Ese resguardo proporcionado por el alto funcionario de gobierno permitió al líder de la resistencia clandestina una libertad de movimiento y de conspiración sin igual. La falta de ese apoyo para los sucesivos secretarios generales de AD explica por qué no podrán construir algo semejante posteriormente. Al ser descubierto Moreno en su audaz juego político, el proyecto civil de gobierno pierde fuerza. Para encubrir la crisis, Moreno continua en la Secretaría de la Junta, pero el resultado de la consulta electoral mostrará qué tan lejos él quería llegar.

El doble fraude de una consulta electoral

La oposición de AD y el PCV mantienen la línea de evitar la realización de la consulta electoral. Ambos partidos continúan

publicando artículos clandestinos y panfletos que llamaban a la unidad contra el gobierno, denunciando todos sus actos y aseverando que las elecciones eran una farsa. Pero el asunto digno de relieve es que AD declinaba en importancia. Sometido a la ilegalidad por cuatro años, enfrentada la dirección clandestina con el liderazgo en el exilio y golpeada severamente luego de haber transitado el camino de la violencia, era de suponer que AD se había venido a menos. Ciertamente había sido capaz de hacer un buen despliegue de propaganda fuera del país y de realizar alguna actividad dentro de Venezuela. Sin embargo, su influencia era menor a la publicidad y la lealtad de los partidarios de AD dentro del país estaba limitada principalmente a un pequeño grupo de militantes que tendrían mucho que ganar si AD regresaba al poder. El gobierno, además, había encarcelado a los dirigentes sindicales opositores y, por medio de sus programas, había logrado conquistar el respaldo de los sectores laborales. (NARA, 731.00/11-2652). Estimaba la embajada americana en Caracas, de acuerdo a un informe del 26 de noviembre de 1952, que los grupos pro-gobierno del FEI ganarían más de un millón de votos porque muchos sufragios que AD había recibido en las elecciones de 1947 eran de personas que votaron por el gobierno en el poder más que específicamente por Acción Democrática y, por consiguiente, no debían ser contados como verdaderos partidarios de AD (NARA, 731.00/11-26522).

El Frente Electoral Independiente (FEI) hizo énfasis en las metas de desarrollo social, con lo que buscó contrarrestar hábilmente la campaña publicitaria de URD. Sin embargo, la organización electoral auspiciada por la Junta de Gobierno no logró copar las propuestas del partido URD. Así por ejemplo Mario Briceño Iragorry, candidato principal a la Asamblea Constituyente por el Distrito Federal, desarrolla un discurso de netos contornos nacionalistas que difícilmente el FEI podía asumir. En el cierre de campaña del partido URD el 26 de noviembre de 1952, Briceño Iragorry expone sus ideas en el Nuevo Circo de Caracas. Allí el escritor se pronuncia contra la entrega de nuevas concesiones petroleras, al tiempo que reclama una política de prevención que se tradujera en mantener *“cerrados los yacimientos petrolíferos que han*

escapado a la zarpa del imperialismo". Por no favorecer los intereses económicos nacionales, en esa ocasión el Cronista de Caracas pone en tela de juicio el Tratado Comercial con los Estados Unidos. Al hacer profesión de fe por los elementos propios de la nacionalidad, Briceño Irigorry manifiesta su desacuerdo con *"las llamadas puertas abiertas con el capital extranjero, que está desplazando lo venezolano"*(Rivas Rivas 1977:212).

Un día antes de hacerse efectiva la consulta electoral, el 29 de noviembre de 1997, el director de la Seguridad Nacional Pedro Estrada le expresa al embajador Fletcher Warren cuales eran las expectativas del gobierno en materia electoral. La Junta de Gobierno estimaba que iba a perder las elecciones en Caracas, pero se encontraba fuerte en otros lugares, especialmente en el oriente de Venezuela y en el Estado Zulia. Calculaba el jefe del cuerpo policial que el porcentaje de votos iba a ser de 10 % para COPEI, 15% para URD y el gobierno obtendría entre 70 y 75 %. *"Nosotros no podemos, no debemos, dejar caer este país en manos extremistas"*, fue el planteamiento final de Estrada (NARA, 731.00/11-2952). La frase dejaba en claro la indisposición del gobierno a dar marcha atrás en su plan de retener el control del Estado.

El 1 de diciembre de 1952, el embajador Fletcher Warren informa por medio de un telegrama al Secretario de Estado Dean Acheson que el partido URD iba ganando en todo el país, excepto en Mérida por ser el bastión electoral de COPEI, y en el estado Táchira, entidad donde había nacido el coronel Pérez Jiménez. (NARA, 731.00/12-152). Al día siguiente, sin embargo, el embajador Warren comunica que la Junta había desconocido los resultados electorales a causa del apoyo dado por los partidos AD y PCV a URD.

El caso es que la derrota política del abstencionismo de AD será convertida en victoria publicitaria. En conversación con el funcionario del Departamento de Estado Bainbridge C. Davis, el ex ministro Juan Pablo Pérez Alfonso conviene en que la población venezolana había preferido el voto y no la violencia: *"El admitió que eso tuvo más efecto sobre la mayoría de los votantes de AD que las instrucciones del partido de abstenerse a votar"* (NARA, 731.00/12-252) Pérez Alfonso resta importancia a las causas que habían separado a estos dos partidos

políticos, al indicar que las diferencias habían sido en base a personalidades. Por su parte, Rómulo Betancourt declara a la prensa en San José de Costa Rica, el 2 de diciembre de 1952: “*La nueva situación política, creada por la crisis interna de la dictadura, se hace más aguda, determinada por el viraje de Acción Democrática en respaldar a los candidatos de la oposición con sus votos*” (NARA, 731.00/12-252). Con algunos matices adicionales, el ex-presidente mantendrá esa versión sesgada de los hechos en *Venezuela, Política y Petróleo*, libro escrito durante su tercer exilio: “*En efecto, Acción Democrática, modificando rápidamente su actitud abstencionista inicial ante los cambios operados en la situación política del país, había votado por los partidos de oposición legalizados*» (Betancourt, 1979:671). Con ello escondió que las bases electorales de AD habían votado espontáneamente, sin acoplarse a las instrucciones provenientes de la dirección de este partido. Político entrenado por haber vivido las experiencias de la oposición, el gobierno y el exilio reiterado, Betancourt intentó sacar provecho de la crisis política suscitada en el alto gobierno.

En contraste, el coronel Pérez Jiménez incautamente agrava la crisis al enviar un telegrama precipitado a Jóvito Villalba e Ignacio Luis Arcaya el 2 de diciembre de 1952. El ministro de la Defensa admite implícitamente la derrota oficial en la parte final del mensaje. Así les dice al secretario general y presidente de URD: “*La Institución Armada, tan escarnecida por ustedes, no está dispuesta a admitir que por acuerdos torvos se vaya a lesionar el prestigio y el progreso de la nación, seriamente comprometido por el **triumfo electoral** [negritas nuestras] de Acción Democrática y el Partido Comunista, que URD ha propiciado*” (Stambouli, 1980:282). Al no informar cabalmente la verdad de la conspiración interna, la opinión de la gente se inclinó a creer que URD había ganado en buena lid y que la Junta de Gobierno había cometido un fraude sin más. Esa, sin embargo, no fue toda la verdad de los hechos. El ministro Pérez Jiménez tuvo poderosas razones para creer que el gobierno iba a ganar limpiamente la consulta electoral. Tomaría unos días más aclarar la verdad de aquella confusa circunstancia política.

Habiendo sido puesto en libertad la noche del 2 de diciembre de 1952, el presidente de URD Ignacio Luis Arcaya visita al embajador

Warren al día siguiente, a fin de explicar la posición de su partido. Tras expresar que URD es una fuerza moderada, admite lo siguiente: “URD ha ganado una abrumadora victoria electoral que ha sorprendido aún a los líderes del partido. Muchos de los votos no fueron por URD sino como protesta contra el presente régimen. Adecos y comunistas aprovecharon la oportunidad de votar contra el gobierno al apoyar la tarjeta de URD. Repudia a Briceño Iragorry pues no es un hombre de URD ni representa los ideales del partido” (NARA, 731.00/12-352). Arcaya anuncia una huelga general para el 4 de diciembre, si las conversaciones en el Palacio de Miraflores esa misma tarde no daban resultados satisfactorios. Sin embargo, el fracaso en la convocatoria a la huelga debilitó la oposición partidista y las Fuerzas Armadas recobraron el prestigio que, temporalmente, habían perdido debido a la confusión reinante luego de verificarse la consulta electoral.

El evento electoral del 30 de noviembre de 1952 no tenía, para la fecha, precedentes en la historia política de la región. Debe tenerse presente que en vista de la alta tasa de analfabetismo reinante, cantidad que para la época era aproximadamente del 65% de la población, la elección fue arreglada para que la votación se hiciera por medio de tarjetas diseñadas en diferentes formas y colores. De manera que el escrutinio del sufragio fue un acto en el que la mayoría de esa población no participó directa o indirectamente. Mediante un informe elaborado el 10 de diciembre de 1952, el funcionario de la embajada americana Franklin W. Wolf asienta que en la mañana del 30 de noviembre de 1952 el gobierno militar estaba confiado de que la población elegiría una mayoría substancial de los miembros de la Asamblea Constituyente identificados con la administración en el poder: “A las 8 :30 p.m. del 30 de noviembre los resultados preliminares de la votación, particularmente de las ciudades de Caracas, Valencia y Maracaibo, habían sido recibidos por los oficiales que esperaban en el Palacio de Miraflores. Estos resultados preliminares causaron gran consternación porque ellos indicaban que el voto combinado de la oposición era más de dos a uno contra el voto de aquellos partidos favorables a la administración” (NARA, 731.00/12-1052). La consternación se produce porque los resultados iban más allá de cualquier expectativa pesimista. La falta de sagacidad política termina por complicar aún más la situación del gobierno. Así lo describió Wolf: “Después de la

primera publicación oficial (un grave error de parte del Gobierno) de noticias que indicaban al pueblo de Venezuela que la oposición estaba encabezando por una larga mayoría, rumores y señales de posibles disturbios comenzaron a expandirse. Después de un breve período de duda fue tomada una acción, y el 2 de diciembre fue hecho el anuncio de que el Ejército..., había decidido cambiar la forma del brazo ejecutivo de una Junta de tres hombres a una Presidencia Provisional' (NARA, 731.00/12-1052). A diez días de haberse hecho efectiva la consulta electoral, la población desconocía los resultados definitivos de la misma. Y la razón de semejante retraso guardaba relación con la puesta en ejecución de un fraude electoral.

Las dudas enfocaban hacia Miguel Moreno, pues era visto como el más hábil político de la Venezuela del momento. De acuerdo a Franklin W. Wolf: *"Una gran cantidad de individuos que mantienen posiciones estratégicas en varios ministerios son amigos y designados de Moreno. Es totalmente posible que Moreno pudo haber concebido una conspiración que eventualmente le habría dado el control supremo de Venezuela"* (NARA, 731.00/12-1052). La conspiración había comenzado por animar a la Junta a hacer la consulta electoral. Moreno había asegurado al coronel Pérez Jiménez que los resultados serían favorables en vista de la clara evidencia de que el gobierno militar había hecho un buen trabajo y, en consecuencia, la influencia de AD había menguado. Al propio tiempo, el secretario de la Junta operaba secretamente a través de los partidos de oposición y más particularmente a través de URD, guardaba conexiones con un sector de Acción Democrática y los comunistas, todo lo cual explicaba la abrumadora mayoría de los resultados electorales a favor de la oposición. No exento de perplejidad, Wolf comentaba que *"...sólo muy tarde Pérez Jiménez despertó al hecho de que estaba rodeado en el Palacio de Miraflores por verdaderos traidores"* (NARA, 731.00/12-1052). La certeza de haber sido internamente traicionados es la vía que explica la decisión del alto mando militar el 2 de diciembre de 1952. Los comandantes de las Fuerzas Armadas confían en un hombre, en el ministro Pérez Jiménez, razón por la cual es nombrado Presidente provisional.

En lo inmediato, sin embargo, Pérez Jiménez no provoca una purga general de los designados por Miguel Moreno. El coronel Félix Román Moreno es mantenido oficialmente en el poder, en un esfuerzo

por mostrar que era un leal partidario de Pérez Jiménez. Agudamente, Franklin W. Wolf dirá al respecto: “*Esto probablemente es verdad, con la sola excepción que si algo le sucede a Miguel Moreno, la sangre podría demostrar que es más espesa que el agua y el Coronel no podría resistir tal examen supremo de lealtad*” (NARA, 731.00/12-1052). Miguel Moreno pierde finalmente su posición en la Junta, pero no fue objeto de alguna sanción que le impidiera libertad de movimiento. Se marcha del país y establece oficina en la ciudad de Nueva York.

Pero en fin ¿cómo ocurrió el fraude? Los resultados electorales preliminares fueron recibidos por Pérez Jiménez y sus partidarios con gran consternación. Sin embargo, debido a que ellos venían principalmente de la población urbana de Caracas, Valencia y Maracaibo, no hubo un alto grado de necesidad de ejecutar un fraude inmediato. Para los militares era razonable esperar que la oposición lograra una amplia mayoría en esos lugares, aunque no en otras partes del país. Pero luego, el gobierno autorizó el fraude en la recolección de los resultados siguientes, vale decir, en una segunda etapa. El fraude había ocurrido, un hecho que no parecía ser algo inédito en la historia electoral de Venezuela. Pero el asunto de relieve, que le dio singularidad a la consulta del 30 de noviembre de 1952, fue el que ambas partes cometieron fraude. En este sentido el funcionario Franklin W. Wolf recogió algunas opiniones: “*Un individuo con más de 20 años de experiencia en Venezuela, presidente de una gran corporación, afirmó categóricamente... Ha sido un gigantesco doble engaño. El fraude original fue iniciado por la oposición. Este se juntó con el fraude del Gobierno en el poder’...*” (NARA, 731.00/12-1052). Esta discriminación de los resultados electorales no estaba al alcance del hombre de la calle.

La tesis del voto protesta era insuficiente para explicar la derrota electoral del gobierno. Hubo efectivamente votos de rechazo al régimen pero quedaron limitados a un segmento del total de la población votante. Aquéllos que permanecieron leales al ilegalizado partido AD no encontraron otra vía para expresar sus opiniones que votar por URD. Los ciudadanos influenciados por la propaganda comunista también depositaron sus votos a favor de URD. Los votantes que sinceramente

creían en el nacionalismo y que fueron convencidos por la prédica de algunos líderes políticos de que la riqueza de Venezuela estaba siendo explotada por intereses extranjeros, apoyaron a URD. Hubo también algunos votantes que rechazaron el regionalismo, que resintieron la continuación en el poder del grupo andino personificado por Pérez Jiménez. De nuevo la reacción anti-andina, esta vez expresada electoralmente, se hizo presente en la vida política del país.

Colofón

En suma, la derrota electoral de Pérez Jiménez obedeció al efecto combinado del voto de protesta y la conspiración interna de Miguel Moreno y otros altos funcionarios dentro de la administración. El secretario de la Junta había apostado a un gobierno nacido de la alianza de URD, AD, comunistas y el grupo Uribante. Quizás un gobierno con tan heterogénea base política hubiera resultado poco estable. Pero el punto digno de poner de manifiesto es que Miguel Moreno tuvo las dotes persuasivas del animal político, pues había logrado convencer a Pérez Jiménez de la bondad del camino electoral. Muy pocos supieron que el 30 de noviembre de 1952 hubo, en realidad, un doble fraude. Es verdad que URD obtuvo una importante votación, pero no toda provino de la libre y soberana voluntad del elector.

El cúmulo de evidencias indicaban que la conspiración de Miguel Moreno contra el gobierno era la causa del considerable número de votos recibidos por URD. Las mejores fuentes de la embajada americana en Caracas sostenían que la traición empezó cuando Moreno estableció contacto con líderes de URD, Acción Democrática y Partido Comunista, llegando a un acuerdo. Miguel Moreno no resultó un socio estable ya que tenía aspiraciones propias. Un informe del funcionario americano Henry A. Hoyt aseveraba el 18 de diciembre de 1952 lo siguiente: *“Algunas fuentes están convencidas de que si la victoria de URD hubiera sido reconocida y apoyada por el Ejército, Miguel Moreno habría sido nombrado Presidente Provisional”* (NARA, 731.00/12-1852). Los partidarios de Moreno estaban colocados en posiciones estratégicas y, aunque ostensiblemente trabajaban por el FEI, habían realmente dado apoyo a la

campana de URD. Estos partidarios incluían funcionarios en posiciones claves del gobierno como jefes de la Seguridad Nacional, gobernadores de varios estados del país y testigos del FEI en los organismos electorales. El modo como fue puesto en práctica el fraude resultó tan audaz como inescrupuloso. Cuando el total de la votación fue recibido en niveles electorales medios, los testigos Moreno-FEI cambiaron los totales para mostrar que URD estaba ganando. De allí la abrumadora cantidad de votos obtenidos por URD al ser difundidos los primeros resultados. Mientras tanto, Moreno había pavimentado cuidadosamente el camino para realizar unas elecciones completamente libres al convencer a Pérez Jiménez que el gobierno ganaría una victoria fácil

Al caer en cuenta de la conspiración, Pérez Jiménez comenzó a desmontar el tinglado organizado por Miguel Moreno. El 10 de diciembre de 1952, el doctor Luis Hueck, Director de Industrias del Ministerio de Fomento, es destituido del cargo y sometido a arresto. Con pruebas documentales en mano el gobierno determina que Hueck había estado comprometido en promover los esfuerzos de URD mientras se hacía pasar como miembro del FEI. Algo semejante tiene lugar con el presidente del Instituto Nacional de Nutrición del Ministerio de Sanidad, Armando González Puccini, quien es removido de su posición porque a través de la captura de los archivos de URD quedó en evidencia que había estado contribuyendo para la campana de este partido. Debido a sus actividades a favor de URD, también son destituidos los jefes de la Seguridad Nacional en los estados Carabobo, Guárico y Miranda. Otro tanto ocurre en las gobernaciones de los estados Yaracuy, Anzoategui y Miranda donde son designados gobernadores interinos. La embajada americana en Caracas no llegó a tener evidencias para indicar que Luis Felipe Llovera Páez había estado envuelto en la conspiración, aunque hacía conjeturas respecto de Germán Suárez Flamerich, de quien el segundo secretario Henry A. Hoyt anotaba lo siguiente: *“Parece ser más probable que Suárez Flamerich estuvo envuelto o conoció de la traición”* (NARA, 731.00/12-1852), presunción ésta que no encajaba con la imagen de haber sido, tal como aseveraba la oposición, un secretario en funciones interinas de Presidente.

Respecto al fraude electoral que una parte del gobierno se hizo a sí mismo, el líder social cristiano Rafael Caldera proporcionó a la embajada americana en Caracas un ejemplo de cómo tuvo lugar la conspiración. En el Territorio Federal Delta Amacuro habían en la época aproximadamente quince mil electores registrados, tres mil de ellos estaban ‘civilizados’ y doce mil indígenas: “*El Dr. Caldera dijo que los padres Capuchinos le habían informado que los doce mil indios electores estaban seguramente en las manos del Gobierno, debido a la estrecha vigilancia de los delegados y a la ayuda y protección dada a los indios. Sin embargo, cuando los primeros resultados vinieron se encontró que Delta Amacuro había votado por URD y el Gobierno, en los primeros boletines, anunció que URD había ganado un escaño en la Asamblea Constituyente por Delta Amacuro. Los resultados finales, sin embargo, dados por el Gobierno el 13 de Diciembre mostraron que Delta Amacuro había sido ganada por el FEI. Este cambio podría ser interpretado como indicación de que el Gobierno había descubierto la traición que había ocurrido en aquél territorio*” (NARA, 731.00/12-1852). Otra sorpresa en los resultados electorales había tenido lugar en la Colonia Agrícola Turén, donde el gobierno había hecho un trabajo excepcional al darle a los agricultores de aquella región un mejor nivel de vida: “*Un grupo, por ejemplo, había recibido gratis casas nuevas, tierras limpias y aradas, escuelas, autobuses escolares, casas clubes, cines, iglesia, hospital y todos los servicios médicos disponibles y la colonia había costado para la fecha aproximadamente doce millones de dólares*” (NARA, 731.00/12-1852). Con todo, el gobierno recibió de Turén solamente unos pocos votos ya que los beneficiarios de la ayuda oficial votaron por el partido URD.

Las contribuciones financieras, un elemento imprescindible para cualquier campaña electoral, reafirmaban la certeza del complot. De acuerdo a las investigaciones policiales, URD había gastado más dinero que el gobierno y COPEI juntos. Algunos donantes habían sido identificados, como en el caso del empresario Eugenio Mendoza, quien había contribuido con quinientos mil bolívares, una cantidad alta para la época. Sin embargo, el grueso de los recursos económicos provinieron de la administración pública. Efectivamente, URD había gastado una sorprendente cantidad de dinero. El punto de relieve estaba en que para la fecha los individuos privados en Venezuela usualmente no

contribuían con grandes cantidades a los fondos de campaña de los partidos políticos. De suerte que algún dinero probablemente vino de fuentes del gobierno.

El 19 de diciembre de 1952, el director de la Seguridad Nacional Pedro Estrada visita nuevamente a la embajada americana en Caracas. Allí admite que si bien Pérez Jiménez debería acercarse y aprender de la gente, debido a la traición de Miguel Moreno desconfiaba de todas las personas: “Estrada dijo que mientras Moreno fue Secretario de la Junta rodeó a Pérez Jiménez solamente con aquellas personas que él deseaba que viera y de éste modo la visión política de Pérez Jiménez quedó limitada en gran medida a los consejos dados a él por el grupo pro Moreno” (NARA, 731.00/12-2252). El jefe de la policía secreta hace un filoso comentario respecto al ex-presidente Suárez Flamerich, obviamente con el deseo de descalificarlo: “... cuando él entró al gobierno tenía poco dinero, pero después de dos años en el gobierno él ha hecho más que ningún otro de los altos funcionarios” (NARA, 731.00/12-2252). Finalmente, Estrada excusa por inevitable la expulsión de Jóvito Villalba y otros líderes de URD y acota que “Pérez Jiménez había tratado de llegar a un acuerdo pero que ellos estaban ‘en su alto caballo’, demandando el reconocimiento de una victoria completa de URD en las elecciones, amenazando con llevar el asunto a la OEA y llamar a huelgas y causar otros disturbios si sus demandas no fueran atendidas” (NARA, 731.00/12-2252). Lucía claro que el propósito central de la visita de Estrada apuntó a ganar el ánimo de la embajada de los Estados Unidos respecto a la estabilidad política reinante.

En resumen, el 2 de diciembre de 1952 Pérez Jiménez asume la Presidencia Provisional por un mandato institucional de las Fuerzas Armadas. Descubierta el fraude que una parte del gobierno se había hecho a sí mismo, los comandantes toman conciencia de la falta de un verdadero partido político como fuente de poder. De modo que la institución militar aparece como el único factor organizado capaz de darle sustentación al Presidente. Debe tenerse presente que en su gestión de gobierno, Pérez Jiménez no descartó la colaboración de hombres civiles en las tareas de la administración pública; la participación de éstos continuó a lo largo de aquellos años. Pero el punto de quiebre fue la exclusión de Miguel Moreno de toda labor oficial al quedar en evidencia

su maniobra político electoral. Cesa la coexistencia de proyectos de gobierno ante una clara dirección militar en la conducción del Estado. Aunque en adelante no habrán vasos comunicantes entre el gobierno y los partidos políticos, finaliza también la inestabilidad política presente desde la conformación de la primera Junta Provisoria. Quizás la anécdota ahorre mayores esfuerzos explicativos: Miguel Moreno intenta detener el efecto en cascada que trajo el descubrimiento del fraude electoral. El 2 de diciembre de 1952, el jefe del grupo Uribante busca persuadir a Germán Suarez Flamerich para que no renunciara a la Presidencia de la Junta: “*Pero ellos son los que tienen la fuerza*”, expresa Suárez Flamerich sin ánimo de oponer resistencia. “*En su debilidad está la fuerza*”, alcanzó a contestarle inútilmente Miguel Moreno (Tamayo, 1963:112).

Comenzaba la dictadura militar. Su característica más acusada, vale decir, la concentración y confusión de poderes, estaba a la orden del día. Desaparecía el equilibrio de la distribución de poderes entre el poder ejecutivo y los órganos políticos independientes los unos de los otros. Un gobierno que en su origen se había proclamado transitorio devenía permanente. El orden, al descansar de hecho en el arbitrio sin freno del gobernante, confiscaba las instituciones liberales sin abrogarlas expresamente. Había un parlamento, pero carecía de iniciativa con respecto a las leyes; habían diputados, pero fabricados artificialmente. Es posible que Marcos Pérez Jiménez apostara más al poder que a la forma política con la que gobierna. No es descabellado presumir que él se sintiera más cómodo gobernando con el respaldo de las Fuerzas Armadas porque, al fin y al cabo, se trataba de un profesional de las armas. En una situación de crisis marcada por la confusión y la ausencia de una verdadera organización partidista que le diera piso político al gobierno, resulta comprensible que Pérez Jiménez recurriera a las Fuerzas Armadas como fuente de poder más segura y estable.

La dictadura no estuvo prefijada de antemano, ni fue un plan impuesto sin más por la voluntad omnímoda de un solo hombre. En otras palabras, allí no hubo un destino cuya fatalidad predeterminó el curso de los acontecimientos. Fueron hombres que hicieron el juego de la política y en la que primaron, al igual que en otros lugares y épocas, condiciones

transtemporales asociadas a la voluntad de poder, al imperio de la fuerza, a la consistencia institucional de la sociedad, así como a los problemas derivados de la legalidad y la legitimidad en el gobierno de los hombres. Al asumir el recurso de la dictadura como forma de poder, Pérez Jiménez deviene en hijo de la fuerza de las circunstancias, una que eclosiona en el terreno de las astucias y en la tardía comprensión de saberse atrapado en su tejido. Y no es que el suyo fuera el caso de la brizna de paja movida por fuerzas extrañas imposibles de controlar. Es claro que Pérez Jiménez había dado pruebas irrecusables de ambición de mando, un atributo del que por cierto no carecieron sus compañeros de ruta. Habiendo estado previamente inmerso en dos hechos capitales de la vida pública nacional, era improbable que fuera dejado a un lado; él hacía parte de las relaciones de fuerzas que, por definición, es el poder. Con todo, el hecho a subrayar es que Pérez Jiménez arriba a la Presidencia Provisional en una circunstancia política tan inestable que, en sana lógica, no cabría suponerlo en el papel de haber contribuido ex profeso a su empeoramiento.

El regionalismo geográfico, principal fuente de inspiración política del grupo Uribante, no motivó por mucho tiempo a Pérez Jiménez. El no respalda la idea de reivindicar los segundos cincuenta años de gobiernos andinos quizás por haber internalizado los valores nacionales más amplios de la educación militar. Pero es más creíble que su desprendimiento regional no fue tanto el resultado de una reflexión filosófica, sino el producto de un complejo pulseo de fuerzas donde él participó en forma cada vez más protagónica. De otra parte, la actuación de Miguel Moreno dibujaría a un político más lúcido que escrupuloso, con una personalidad provista de una gran voluntad de poder. Su determinación para asumir riesgos crecientes muestra en cierta medida sus propias convicciones personales; quizás una de ellas pudo haber sido el reconocimiento absoluto de la voluntad en la constitución de la obligación moral del ser humano. Su maestría para la intriga lo aproxima a un tipo de hombre político que Maquiavelo reclamó en el buen gobernante, ese que frente a la variable realidad de la *fortuna* sabe oponer las cualidades personales de la *virtud política*. Si Miguel Moreno fue designado secretario de la Junta Militar por ser hermano del jefe de

la Fuerza Aérea, tuvo sin embargo un gran sentido de la oportunidad para obtener provecho de la posición adquirida. Su capacidad para montar una estructura de poder con objetivos políticos definidos casi lo llevan a la Presidencia de Venezuela.

De manera que no hubo mala asesoría política cuando Miguel Moreno convence al comandante Pérez Jiménez de llamar a elecciones para la Asamblea Constituyente; aquel trabajaba a favor de sus propios intereses. Aunque tampoco fue cierto que los partidos políticos ya estaban muy arraigados en el cuerpo social. El gobierno había desmontado toda la estructura sindical en manos de AD, al tiempo que había hecho un buen trabajo entre los sectores populares y los trabajadores de las principales ciudades del país. COPEI era un partido regional andino y URD venía de una humillante derrota en la consulta electoral de 1947. No fue un improbable cambio de línea abstencionista a última hora de AD, partido que con sus votos causaría el triunfo de URD. La capacidad organizativa de Acción Democrática había sufrido una importante disminución tras fracasar en las sucesivas intentonas cívico militares contra el gobierno. Fue la conspiración tramada por Miguel Moreno la razón última que explica la derrota electoral del gobierno el 30 de noviembre de 1952. Que Pérez Jiménez hubiera venido protagonizando un proyecto militar y que, al mismo tiempo, no colocara todas sus aspiraciones políticas en el cesto de la dictadura, muestra como la definición del proyecto se decantó entre compromisos y desacuerdos, hasta llegar a una ruptura final.

En fin, el alto mando militar decide cuando observa que los partidos habían faltado a las reglas del juego electoral y en consecuencia ya había sido suficiente con el experimento democrático. Al sentirse permanentemente amenazado por el peligro de una nueva traición, el gobierno de Pérez Jiménez entró en una dinámica de aislamiento progresivo que se hizo imparable. Ahora bien, el hecho a subrayar no fue tanto la soledad y la concentración de poderes en manos de un hombre, sino el camino inesperado por donde llegó la dictadura.

No mintió el ex-presidente Marcos Pérez Jiménez cuando, treinta y un años después de haber ocurrido el evento electoral del 30

de noviembre de 1952, declaró al respecto lo siguiente: “*Fraude electoral... pues sí, lo hubo en el sentido que desde sectores de nuestro gobierno comenzaron a manipular las elecciones para que se perdieran. Abí comienza el fraude electoral [...] Si los partidos que están en la oposición en connivencia con gente del gobierno fraguan la mistificación de las elecciones, el comienzo del fraude está abí. Lo que sucedió después fue una enmienda al fraude...*” (Blanco Muñoz, 1983:135). De haber comunicado oportunamente la verdad de los hechos, quizás el gobierno de Pérez Jiménez no se hubiera visto forzado a ‘acomodar’ los resultados electorales, ni hubiera sufrido la mácula de un origen dudoso. Pero la historia tiene sus pasadizos, sus recodos y sus sorpresas.

Notas y bibliohemerografía

1. Centros de Fuentes Primarias

AHC (Archivo Histórico del Congreso Nacional). Caracas. Venezuela.

AHM (Archivo Histórico de Miraflores). Caracas. Venezuela.

NARA (National Archives and Record Administration). Washington, DC. USA.

BN (Biblioteca Nacional). Caracas. Venezuela

GU (Lyndon B. Johnson Library. Georgetown University). Washington, DC, USA.

2. Bibliografía

Acuña, Guido (1977) : *Cuando mataron a Ruiz Pineda*. Caracas, ediciones Rafael Arévalo González.

_____ (1990) : *Pérez Jiménez. Un Gendarme Innecesario*. Caracas, editorial Pomaire Venezuela.

Angulo Rivas, Alfredo (1993) : *Adios a la Utopía*. Caracas, Alfadil Universidad de Los Andes.

Barreto, Braulio (1982) : *Confesiones de un Esbirro*. Caracas, editorial Caracas 2000.

Betancourt, Rómulo (1986) : *Venezuela, Política y Petróleo*. Caracas, Monte Avila Editores.

Blanco Muñoz, Agustín (1983) : *Habla el General*. Caracas, UCV.

- Boulton, Margot (1992) : *Una mujer de dos siglos*. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, serie estudios, monografías y ensayos, # 153.
- Briceño Iragorry, Mario (1988) : *Mensaje sin destino y otros ensayos*. Caracas, Biblioteca Ayacucho, # 126.
- Martz, John D. y David J. Myers (1977) : *Venezuela. The Democratic Experience*. New York, Praeger.
- _____ (1954) : *Pensamiento Político del Presidente de Venezuela*. Caracas, Imprenta Nacional.
- Rivas Rivas, Luis (1977) : *Historia Gráfica de Venezuela 1948-1952*. Caracas, Editorial VIS CA.
- Ruiz Pineda, Leonardo (1977) : *Ventanas al Mundo*. Caracas, Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, segunda edición, Imprenta Nacional.
- Stambouli, Andrés (1980) : *Crisis Política. Venezuela 1945-58*. Caracas, Editorial Ateneo de Caracas.
- Tamayo Suárez, Oscar (1963): *De Frente a la Realidad Venezolana*. Limoges, Francia.
- Taylor, Philip B. (1968): *The Venezuelan Golpe de Estado of 1958: The Fall of Marcos Pérez Jiménez*. Washington, DC, USA.
- Torres Molina, Bhilla (1968): *Alirio*. Cromotip, Caracas, Venezuela.
- _____ (1954) : *Venezolanos en el Congreso Nacional 1953-1958 (Notas Bibliográficas)*. Caracas, Salazar y cía.

Alfredo Angulo

Licenciado en Historia (Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes). Magister en Ciencias Políticas (Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina de la Universidad de Los Andes). Doctor en Historia (Universidad Central de Venezuela). Actualmente es profesor de la Escuela de Historia (ULA). Es autor de *Los Andes de Venezuela un Estudio de Historia Política y Pérez Jiménez : tres décadas después*.

Resumen

Desde nuevas perspectivas y con documentación hasta ahora poco considerada, se pretende evaluar al fraude electoral del 30 de noviembre de 1952 y la incidencia que el mismo tuvo en el proyecto militar de gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El autor, con metodología de historiador y politólogo, realiza un profundo examen de los personajes y de los hechos más relevantes relacionados con el proceso electoral, para concluir que en realidad el fraude electoral fue doble tanto de parte del gobierno como de sus opositores, y que el mismo contribuyó de manera significativa a configurar el sistema político del perezjimenismo que más que un proyecto preconcebido es producto también de determinadas circunstancias, bien aprovechadas por el dictador.

Palabras Claves: Marcos Pérez Jiménez, Elecciones, Dictadura, Militarismo, Venezuela.

Abstract

From new perspectives and with documentation up to now little considered, is sought to evaluate the electoral fraud of November 30th of 1952, and the incidence that the same one had in the military project of government of Marcos Pérez Jiménez. The author, with politologist and historian's methodology, carries out a deep exam of the characters and of the more excellent facts related with the electoral process, to conclude that in fact the electoral fraud was double as much on behalf of the government as of its opponents, and that the same one contributed from a significant way to configure the political system of the perezjimenism, that more than a preconceived project, is also product of certain circumstances, advantageous to the dictator.

Key Words: Marcos Pérez Jiménez, Elections, Dictatorship, Militarism, Venezuela.